

# PROMOVIENDO EL ESTADO DE DERECHO Y BUENA GOBERNANZA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

## Un papel más proactivo para el sector privado

### Resumen

El Estado de derecho débil y las estructuras de gobernanza frágiles constituyen posiblemente una de las mayores deficiencias en el desarrollo de la región de América Latina y el Caribe (ALC) durante las últimas décadas. Un Estado de derecho fuerte, respaldado por instituciones sólidas, es una base crucial para la estabilidad política, el crecimiento económico y el desarrollo social. Un Estado de derecho débil, por el contrario, perpetúa la corrupción, la violencia, el crimen organizado y la impunidad, además de socavar la confianza pública en la capacidad de los líderes democráticos para proporcionar respuestas efectivas a las necesidades de la población.

En la mayoría de los países de la región, una cultura de respeto al Estado de derecho se ha desarrollado en mucho menor grado que una cultura de corrupción. El nivel y las características específicas de esta cultura de corrupción varían enormemente de un país a otro. El primer paso para poder abordar esta realidad es reconocer la naturaleza generalizada y perversa de la corrupción, así como el hecho de que cuanto más tiempo se permite que la corrupción se perpetúe, más difícil es revertirla. Un segundo paso es promover un consenso nacional fuerte y no partidista en apoyo de una cultura de Estado de derecho y buena gobernanza. En un mundo donde la polarización política está aumentando, este tipo de consenso nacional genuino es difícil de construir.

Los gobiernos a nivel nacional y subnacional tienen la responsabilidad de liderar los esfuerzos para construir este consenso y promover políticas públicas coordinadas en apoyo del Estado de derecho y la buena gobernanza. Durante demasiado tiempo, en muchos países de la región los líderes del sector público y privado no han hecho más que hablar sobre estos objetivos, en parte porque no entienden claramente cuán crítico es un Estado de derecho fuerte para promover el crecimiento y desarrollo nacional, y quizás más importante aún, porque algunos de ellos se benefician directamente de un Estado de derecho débil y comprometido.

La sociedad en general, incluyendo líderes empresariales, representantes de la sociedad civil y expertos de organizaciones no gubernamentales, centros de pensamiento (*think tanks*) y universidades, y con aportes de exfuncionarios públicos que brindan una perspectiva público/privada, debe jugar cada vez más un papel de liderazgo en estos esfuerzos, incluso a través de una mayor cooperación público-privada. Líderes del sector privado deben asumir este papel proactivo más no solo porque un fuerte Estado de derecho trae beneficios comerciales, sino también, y tal vez lo más importante, por el impacto positivo que tiene en el desarrollo nacional.

Un objetivo importante de cara al futuro es motivar discusiones y coordinación público/privadas más activas sobre estos temas a nivel subnacional, nacional y regional, incluyendo la necesidad de un acuerdo público/privado sobre “políticas de Estado” que trasciendan los partidos políticos y las divisiones izquierda-derecha. Una coalición del sector privado más proactiva y unificada en apoyo del Estado de derecho podrá hablar con más fuerza y contribuir directamente – más allá de la polarización política – a abordar cuestiones clave que han frenado el desarrollo genuino en la región.

El Diálogo Interamericano y su recién establecido Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Estado de derecho y Buena Gobernanza hacen un llamado a todos los líderes del sector privado con un interés genuino en promover una cultura más fuerte de Estado de derecho a que se unan a este esfuerzo. Este documento propone un marco para un sector privado más proactivo y áreas de enfoque sugeridas para iniciativas concretas con impacto, incluyendo la promoción de (1) normas de autorregulación a nivel empresarial; (2) independencia y transparencia judicial; (3) regulación del dinero en la política; (4) ética pública y anticorrupción en la modernización del Estado; (5) educación ciudadana y ética pública; y (6) una comprensión de los costos reales de la inseguridad y la corrupción.

## **La corrupción, la falta de independencia judicial, la inseguridad y la expansión de las redes sociales socavan el Estado de derecho y la confianza pública.**

### Introducción

América Latina y el Caribe (ALC) están actualmente enfrentando algunos de los desafíos políticos, económicos y sociales más difíciles que la región ha experimentado en décadas: altos y crecientes niveles de pobreza, desigualdad, polarización política, corrupción, informalidad económica, violencia, crimen transnacional e impunidad, junto con descensos en los ya bajos niveles de crecimiento económico y caídas récord en la confianza

pública en las instituciones democráticas<sup>1</sup>.

La pandemia de COVID-19, que llevó a un número desproporcionadamente alto de muertes per cápita en ALC, las inestabilidades globales más allá del Hemisferio Occidental, incluyendo la guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente y la creciente presión para tomar partido en la intensificada competencia entre EE.UU. y China, y el impacto de estos factores en el crecimiento global y los precios de las materias primas, solo exacerban aún más estas condiciones ya existentes en ALC. Finalmente, la profunda polarización política y el debilitamiento del Estado de derecho y la gobernanza en EE.UU., agravados por una crisis migratoria en su frontera sur que está en gran parte vinculada al deterioro de la situación en ALC, completan el difícil y desafiante contexto del Hemisferio Occidental.

Aunque esta lista de condiciones políticas, económicas y sociales en la región suena desalentadora, es importante reconocer que ALC cuenta con ricos recursos naturales y humanos, y en contraste con la mayoría de las regiones del mundo, durante muchas décadas se ha beneficiado de una ausencia casi total de conflictos civiles y militares transfronterizos. En cuanto a recursos naturales, ALC es uno de los principales graneros del mundo con importantes excedentes y exportaciones de casi todas las materias primas agrícolas y muchos productos alimenticios no básicos, producción local de energía convencionales y verde, sin mencionar las ricas reservas de minerales críticos. Además, cada vez más está sirviendo como centro para el desarrollo de alta tecnología, servicios de Internet y software<sup>2</sup>. Un progreso real en el abordaje de sus serios desafíos de Estado de derecho y gobernanza permitirá a la región aprovechar mejor estas fortalezas.

Los desafíos comunes del Estado de derecho en la región de ALC incluyen:

**Ineficiencias crónicas y corrupción** en varios niveles de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que socavan directamente el Estado de derecho al permitir que individuos y/o entidades comerciales eviten los procedimientos legales mediante sobornos, comisiones ilegales u otros medios ilícitos. Esto conduce, entre otros resultados, a mercados y precios distorsionados, competencia desleal, marcos regulatorios onerosos e inconsistentes, regímenes débiles de derechos de propiedad y cumplimiento cuestionable de contratos. La corrupción crónica también socava la fe pública en la democracia y la confianza en los líderes elegidos democráticamente para proporcionar respuestas efectivas a sus necesidades y demandas.

**La falta de independencia, politización y corrupción dentro del poder judicial** erosionan la confianza en el sistema legal y conducen directamente a resultados judiciales injustos e inconsistentes, particularmente en disputas que involucran intereses poderosos y temas políticamente sensibles. Esto incluye cada vez más la interferencia directa en el sistema de justicia por parte de grupos del crimen organizado. Por su naturaleza, el sistema de justicia es muy lento e indeciso en sus esfuerzos por aumentar su propia eficiencia y efectividad. Un sistema judicial capturado/politizado aumenta el riesgo país para los inversores y hace que los países de la región de ALC sean menos competitivos en la atracción de capital/inversión en comparación con otras regiones del mundo con sectores judiciales menos corruptos y más independientes.

**La inseguridad** reflejada en altos niveles de delincuencia y violencia en muchos países de la región de ALC, a menudo con participación directa de grupos del crimen organizado, aumenta los costos de hacer negocios (un “impuesto” implícito sobre las empresas privadas que refleja el “costo del crimen”). Las empresas no pueden operar sin proporcionar su propia seguridad y protección contra el crimen, funciones que deberían ser responsabilidad del Estado. En los peores casos, los “pagos por protección” ilícitos regulares de las empresas (o “derecho de piso”, como se le conoce en algunos lugares) a las fuerzas policiales y de seguridad, así como directamente a grupos del crimen organizado, son a menudo la única opción efectiva para garantizar condiciones seguras para las operaciones comerciales, incluidas las operaciones electrónicas y cibernéticas.

**La expansión dramática del uso (y mal uso) de las redes sociales** y la falta de adopción y aplicación de estándares para el funcionamiento de las plataformas de redes sociales que respeten la libertad de expresión han contribuido a la polarización política. Una tarea clave en el futuro es mejorar la comprensión de las dinámicas concretas y el impacto de la exposición a las redes sociales en el público en general y cómo se puede abordar mejor este impacto.

Dadas estas condiciones y otras, los actores del sector privado en la región de ALC han enfrentado durante décadas serios desafíos vinculados a un Estado de derecho e instituciones débiles. Esta situación ha complicado las decisiones tanto de empresas locales como internacionales sobre inversiones en la región, además de hacer más difíciles y costosas las decisiones operativas cotidianas.

## De una cultura de corrupción a una cultura de Estado de derecho

En un ciclo vicioso y que se perpetúa, la corrupción que subyace a la mayoría de las condiciones descritas anteriormente socava directamente el Estado de derecho y la buena gobernanza, lo que a su vez resulta en una mayor corrupción. Años de esta realidad han resultado en el desarrollo de una cultura de corrupción bien establecida y sofisticada en muchos países de la región.

El nivel y las características específicas de esta cultura de corrupción varían enormemente de un país a otro. Varios países de la región (Uruguay, Chile y Costa Rica) han alcanzado niveles de transparencia y anticorrupción que los sitúan cerca (o en el caso de Uruguay, por encima) de Estados Unidos y numerosos países europeos y otros países desarrollados. Sin embargo, la mayoría de los países de la región se clasifican en la mitad inferior de los países del mundo en términos de percepción de la corrupción<sup>3</sup>.

Abordar esta cultura de corrupción requiere primero reconocer la naturaleza generalizada y perversa de los desafíos, y luego definir e implementar esfuerzos integrales para fortalecer las instituciones, la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. El progreso con estos esfuerzos puede lograrse de manera más efectiva basándose en un consenso nacional genuino y articulado consistentemente en apoyo del Estado de derecho, liderado por el gobierno y con la participación directa y compromiso de la sociedad en general, incluido el sector privado. Con la excepción de solo unos pocos países en la región, se puede argumentar que tal consenso nacional genuino no existe.

**Reconocer la corrupción generalizada es el primer paso para fortalecer las instituciones, la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas.**

La naturaleza cada vez más compleja e interconectada de los problemas globales, incluida la expansión regional y global de la huella del crimen transnacional organizado y la violencia y los altos niveles de polarización política, no puede ser abordada completamente por los países individuales por sí solos. El fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernanza en ALC se mejoraría significativamente a través de esfuerzos subregionales y regionales expandidos en el hemisferio occidental, incluyendo un papel más proactivo y coordinado por parte de organizaciones internacionales, bancos de desarrollo y las democracias más desarrolladas del hemisferio occidental y del mundo. Es aún más importante fortalecer los esfuerzos nacionales y regionales de este tipo en las Américas en un momento en que Estados Unidos está sufriendo una profunda polarización política y un debilitamiento de su propio Estado de derecho.

Paralelamente al reconocimiento y enfrentamiento de la cultura de corrupción, también es de crucial importancia promover en todos los niveles de la política, la economía y la sociedad de la región una cultura fuerte e integral de respeto al Estado de derecho y la probidad. Este objetivo en última instancia solo se logrará y se solidificará con un esfuerzo multigeneracional para educar y promover dentro de la población una comprensión más profunda de la importancia y el significado del Estado de derecho, la buena gobernanza y la ética pública.

Este proceso debe abarcar desde la escuela primaria hasta la universidad y extenderse a la vida profesional, integrando estos elementos a través de nuevos planes de estudio educativos y de capacitación, así como a través del desarrollo y uso de información y recursos que puedan difundirse de manera más efectiva a través de nuevas tecnologías, incluidas las redes sociales. Un contenido bien concebido y diseñado para abordar el impacto de las redes sociales en la polarización política, que se comparta a través de múltiples medios, incluso a través de las plataformas de redes sociales, podría contribuir a fortalecer la comprensión pública de estos temas, que de otro modo serían abstractos.

**ALC puede abordar la corrupción y fomentar una cultura de Estado de derecho mediante esfuerzos entre los gobiernos y el sector privado.**

## Un sector privado más proactivo

Los gobiernos tienen la responsabilidad principal de liderar los esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho y la buena gobernanza. Mientras que los líderes del sector privado deben prestar su apoyo proactivo y colaboración directa con los gobiernos nacionales, también pueden y deben asumir un liderazgo cada vez más activo en iniciativas específicas para promover una cultura de respeto al Estado de derecho, no solo porque puede ser comercialmente beneficioso para ellos, sino sobre todo por el impacto positivo que esto tendrá en la promoción de la salud y prosperidad de su país y sociedad.

La acción colectiva y coordinada del mundo privado ampliamente definido, que incluye líderes empresariales, representantes de la sociedad civil y expertos de organizaciones no gubernamentales, centros de pensamiento (*think tanks*) y universidades, y con aportes de exfuncionarios públicos que aporten una perspectiva público/privada, debe jugar cada vez más un papel de liderazgo en estos esfuerzos. Este liderazgo más proactivo del sector privado necesita hablar con una voz unida a nivel nacional y regional e “institucionalizar” sus genuinas preocupaciones sobre la corrupción y su apoyo a un Estado de derecho sólido y buena gobernanza.

Un objetivo importante de cara al futuro es generar discusiones y coordinación público/privadas más activas sobre estos temas a nivel subnacional, nacional y regional. Directamente relacionado con este objetivo está la necesidad de que los sectores público y privado acuerden “políticas de Estado” que se extiendan más allá de los gobiernos de turno y que trasciendan los partidos políticos y las divisiones izquierda-derecha que caracterizan cada vez más a muchos países de la región.

Tales políticas de Estado acordadas servirían para establecer áreas donde prevalezcan los intereses comunes y la neutralidad en lugar de las divisiones y conflictos ideológicos. Una coalición del sector privado más proactiva y unificada en apoyo del Estado de derecho y de tales “políticas de Estado” podrá hablar con más fuerza y eficacia y contribuir – más allá de la polarización política – a abordar algunos de estos problemas fundamentales que durante mucho tiempo han frenado el desarrollo genuino en la región.

Si bien un papel de liderazgo del sector privado más proactivo y responsable como se describe aquí no es

garantía de que pueda lograrse este cambio fundamental hacia una cultura de Estado de derecho, cada vez está más claro que sin tal esfuerzo sostenido por parte de un amplio sector privado para complementar los esfuerzos del sector público, es poco probable que se produzca una mejora significativa.

**El liderazgo del sector privado es crucial para aprovechar recursos, experiencia y un interés creado en promover una gobernanza estable y prosperidad económica junto con los esfuerzos gubernamentales.**

# ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL LIDERAZGO DEL SECTOR PRIVADO EN ESTADO DE DERECHO Y BUENA GOBERNANZA

La siguiente es una lista de áreas de enfoque sugeridas para iniciativas lideradas y apoyadas por el sector privado. Estas ideas surgieron en discusiones que el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano llevó a cabo con una amplia gama de actores del sector privado de toda la región en los últimos meses, incluyendo con miembros del recién formado Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Estado de Derecho y Gobernanza en América Latina y el Caribe del Diálogo Interamericano, que se reunió por primera vez en Washington, DC, el 16 y 17 de mayo de 2024. Un mayor diálogo y coordinación sobre estos temas entre representantes de los sectores público y privado en cada país y también a nivel regional sería un paso importante para promover el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernanza, reconociendo que el nivel de desarrollo del Estado de derecho y la buena gobernanza varía significativamente entre los países de la región de ALC. Esta lista de áreas prioritarias no es de ninguna manera exhaustiva y busca promover una discusión más profunda en la región sobre estas ideas:

## 1 Autorregulación y anticorrupción a nivel empresarial

Mientras que muchas empresas, particularmente las grandes y la mayoría de las compañías multinacionales (por ejemplo, las empresas e individuos estadounidenses están sujetos a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero - FCPA), ya deben cumplir con estrictos estándares de cumplimiento de normativa (*compliance*) y anticorrupción, este no es el caso para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas en la región de ALC ni para las asociaciones empresariales. La autoevaluación y autorregulación son pasos clave para establecer estándares básicos de compliance y anticorrupción, y gobernanza corporativa. Además, la capacitación regular sobre políticas de anticorrupción para líderes y empleados del sector privado contribuiría a un reconocimiento más claro de que la corrupción, aunque puede tener beneficios comerciales a corto plazo, a mediano y largo plazo socava la libre competencia del mercado y el crecimiento económico .

Si el propio sector privado pierde la oportunidad de contribuir activamente en el desarrollo y promoción de una cultura general de Estado de derecho y altos estándares de cumplimiento, corre el riesgo de que los burócratas gubernamentales impongan estos estándares a través de iniciativas de políticas públicas que no reflejan necesariamente con precisión las condiciones que enfrenta el sector privado.

## 2 Independencia judicial y transparencia

Promover una mayor independencia y transparencia en el poder judicial en la región de ALC contribuiría directamente a despolitizar las decisiones fiscales y judiciales, fortaleciendo el Estado de derecho y la buena gobernanza, y asegurando una mayor certeza jurídica. Se necesitan enfoques innovadores para promover la independencia y transparencia judicial, incluyendo asegurar procesos de selección, nombramiento y remoción despolitizados para los jueces y elaborar una hoja de ruta para identificar señales de alerta temprana y riesgos para el papel esencial que desempeñan los tribunales independientes, así como estrategias para protegerlos. Un uso mucho más amplio de nuevas tecnologías y digitalización en todo el sistema también es clave. Estos objetivos podrían lograrse de manera más efectiva si se identifican como prioridades no solo para el sector público sino también para el sector privado.

## 3 Regulación del dinero en la política

Las contribuciones ilegales a partidos políticos y campañas son uno de los medios más frecuentemente utilizados para comprar influencia política y corromper a funcionarios nacionales y subnacionales en todas las ramas del gobierno, incluyendo cada vez más la participación directa y pagos por parte de grupos del crimen organizado. Con el objetivo de desarrollar una mejor comprensión de cómo proteger la administración pública de la influencia ilícita del dinero en la política, es esencial definir estándares razonables para limitar, monitorear y reportar de manera transparente las contribuciones financieras privadas a partidos políticos y elecciones y prevenir las contribuciones financieras del crimen organizado. Además de definir y establecer estándares para controlar el papel ilícito del dinero en la política, se necesita una evaluación de los obstáculos clave para implementar dichos estándares, así como un esfuerzo activo para aumentar la conciencia pública sobre esta grave amenaza a la democracia.

## 4 Ética pública y anticorrupción como elementos clave de la modernización del Estado

Existe una necesidad urgente en la mayoría de los países de la región de ALC de modernizar las operaciones gubernamentales a través del desarrollo de capacidades, capacitación en habilidades profesionales y un uso más amplio de la tecnología destinada a hacer que el Estado sea más efectivo y reducir las oportunidades de comportamiento corrupto. Se necesita instrucción profesional de alta calidad para funcionarios públicos, incluyendo capacitación especializada en ética pública y políticas de anticorrupción, junto con un uso mucho más amplio de herramientas de alta tecnología, incluyendo gobierno electrónico y digitalización de procedimientos. Los fuertes procedimientos de compliance y anticorrupción del sector público, que en muchos casos son reflejo directo de las regulaciones de *compliance* y anticorrupción a nivel de empresa, contribuirían significativamente a consolidar el Estado

de derecho, y deben coordinarse conjuntamente entre los sectores público y privado, con un papel clave desempeñado por líderes empresariales y representantes de la sociedad civil.

## **5 Educación ciudadana y ética pública**

A medida que la polarización política y la violencia invaden cada vez más las escuelas y aulas, es críticamente importante que los sistemas educativos equipen a las y los estudiantes y maestros con habilidades y conocimientos sobre principios básicos de democracia y Estado de derecho, resolución de conflictos, trabajo en equipo y diálogo pluralista. En América Latina, los modelos efectivos de educación ciudadana y para la paz deben enfocarse en abordar los desafíos de la vida real que enfrentan las y los estudiantes, así como en construir una comprensión sólida de las responsabilidades ciudadanas y la ética pública, que son habilidades para toda la vida esenciales para construir sociedades más democráticas. Es necesario concebir y establecer iniciativas innovadoras para promover una cultura más fuerte de Estado de derecho, incluyendo la exploración de modelos público/privados de servicio cívico nacional para jóvenes adultos vinculados tanto a la ética pública como a la formación laboral, así como el uso de plataformas de redes sociales y otros medios para difundir contenido educativo/de capacitación para abordar la polarización política y promover una ética pública más fuerte, anticorrupción y Estado de derecho.

## **6 Costos reales de la inseguridad y la corrupción**

Para el sector privado, la inseguridad y la corrupción generan costos significativamente aumentados, incluyendo la necesidad de grandes inversiones del sector privado en sistemas de seguridad sofisticados. Es clave identificar claramente el costo que la inseguridad y la corrupción tienen en las operaciones comerciales y hasta qué punto esto socava la inversión y el desarrollo, así como identificar áreas de potencial colaboración privada/pública. En muchos países de ALC, por ejemplo, los sistemas de seguridad privada generan bases de datos de información que podrían contribuir a políticas de seguridad pública y enjuiciamientos más efectivos si hubiera una mejor coordinación entre los sectores privado y público.

Además, se necesita liderazgo del sector privado para impulsar políticas de seguridad pública efectivas que se implementen dentro del Estado de derecho para contrarrestar la percepción pública de que los enfoques de mano dura contra el crimen son la única solución al aumento de la inseguridad en la región. Políticas de seguridad pública duales que incluyan una investigación y castigo efectivos de los delitos respetando el debido proceso, junto con políticas penitenciarias bien pensadas y efectivas que devuelvan el control de las prisiones a las autoridades, así como políticas sociales que aborden las causas estructurales de la violencia, son esenciales si se quiere que los gobiernos sean vistos como capaces de cumplir democráticamente con la necesidad fundamental de brindar seguridad a las personas.

**BIBLIOGRAFÍA**

1. UNODC, [Global Study on Homicide 2023, Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean](#), 2023; UNDP, [Governance, democracy and development in Latin America and the Caribbean, 2022](#).
2. Cárdenas, Mauricio, World Economic Forum, ["Here's how Latin America can help tackle the global food, energy and climate crises"](#), 2023; Zhang, Pepe and Otaviano Canuto, Project Syndicate, ["Global Leadership for Latin America and the Caribbean"](#), 2023; Velasco, Andrés, Project Syndicate, ["The Primacy of Political Order"](#), 2024.
3. Transparency International, [Annual Corruption Perception Indexes](#), 2023.

# Agradecimientos

Este documento fue investigado y redactado por Michael Matera, investigador senior no residente del Programa Peter D. Bell sobre Estado de derecho, Tamara Taraciuk Broner, directora, y Daniel Caballero, asociado senior de dicho programa. Si bien incluye comentarios de las y los miembros del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Estado de Derecho y Buena Gobernanza en América Latina y el Caribe del Diálogo, quienes revisaron este documento antes de su publicación, las opiniones reflejadas en esta publicación son nuestras.

## Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Estado de derecho y Buena Gobernanza

Laura Chinchilla, copresidenta de la Junta Directiva, Diálogo Interamericano, y copresidenta del Grupo de Trabajo (Costa Rica)

Rebecca Bill Chavez, presidenta y CEO, Diálogo Interamericano y copresidenta del Grupo de Trabajo (Estados Unidos)

Alejandra Palacios, miembro independiente de la junta, BBVA, GAP, y expresidenta, COFECE (México)

Ana Paula Pessoa, presidenta y miembro de la junta, Kunumi AI (Brasil)

Andrea Grobocopatel, presidenta, Ampatel S.A. y Resiliencia SGR, y fundadora Flor Foundation (Argentina)

Carolina Castro, presidenta, Industrias Guidi, y exsubsecretaria PyME (Argentina)

Connie De Paiz, CEO, Panifresh (Guatemala)

Earl Jarett, miembro de la Junta Directiva, Diálogo Interamericano, y copresidente adjunto y CEO, The Jamaica National Group (Jamaica)

Hernán Larraín, miembro, Diálogo Interamericano, y exministro de Justicia y Derechos Humanos (Chile)

Joe Hill, director general (Ret.), BlackRock (Estados Unidos)

Julia González Romero, asesora jurídica (México)

Michele Lyra, asesora jurídica de litigio senior, América Latina y el Caribe, Shell (Brasil)

Miguel Cortés, presidente, Grupo Bolívar S.A. (Colombia)

Pedro Barquero, CEO, Global Consulting, expresidente, CCIC, and exministro de Desarrollo Económico (Honduras)

Ramón Bernabé Arellano, gerente de asuntos internacionales, Telecom (Argentina)

Roberto Matus, vicepresidente de relaciones gubernamentales LaTam, MetLife (Estados Unidos)

Rodrigo Hinzpeter, asesor general, Quiñenco S.A., exministro del Interior (Chile)

Rosario Navarro, presidenta, SOFOFA (Chile)

Victor Sierra, presidente y CEO, Torino Capital, Investment Bank-New York (Venezuela y Estados Unidos)

Yara Tobar, gerente general, Piedra Santa, y vicepresidenta, CNE (Guatemala)



[www.thedialogue.org](http://www.thedialogue.org)

**Diálogo Interamericano**  
**1155 15th Street NW, Suite 800**  
**Washington, DC 20005**  
**Tel:+1 202-822-9002**